

Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En autos RIT O-1303-2022, RUC 2240388005-5, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados "Figueroa Villa Pedro con Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo", por sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, y se la desestimó en lo concerniente a la nulidad del mismo.

La demandada dedujo recurso de nulidad y la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de once de octubre de dos mil veintitrés, lo acogió; por lo que invalidó el fallo de mérito y dictó el de reemplazo, en que rechazó la demanda en todas sus partes, salvo en lo relativo al otorgamiento de un feriado adeudado.

En contra de este último pronunciamiento, el demandante interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que la materia de derecho que se solicita unificar consiste en determinar si el vínculo entre las partes, formalizado a través de una contratación a honorarios que no se ajusta a los requisitos legales, queda regido por las normas del Estatuto Administrativo o por las del Código del Trabajo.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, respecto de las cuales cabe precisar que la dictada por esta Corte en autos Rol N° 381-2017, no resulta útil a estos efectos por carecer de un pronunciamiento sobre la materia propuesta para su unificación, pues si bien en su origen corresponde a un conflicto sobre la naturaleza jurídica de los contratos celebrados entre un particular y un municipio, limita el análisis a la procedencia de aplicar la sanción de la nulidad del despido.



La segunda emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago en los antecedentes Rol N° 92-2019, examinó la calificación de la relación entre un profesional y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, destacando que se desarrolló en forma continua desde el 17 de octubre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2016, que el demandante ejecutó tareas relativas a “Administrar las soluciones de servicio TI, a través del sistema Aranda; Apoyar los requerimientos y diagnóstico de los usuarios en sus solicitudes TI, soporte telefónico y electrónico a nivel usuarios; Apoyar a los usuarios en el uso de las herramientas TI; controlar el despacho de las cintas de respaldo a la empresa contratada para servicios de custodia de las cintas; administración y control de los bienes e insumos computacionales de la institución; gestora de contratos del departamento TIC (ITIL); y administración del sistema de inventario del departamento TIC” en dependencias del empleador y usando las herramientas que le facilitaba, en jornada de 44 horas semanales, recibiendo pagos mensuales durante todo el período, con reconocimiento de derechos tales como feriados anuales y participación en capacitaciones; lo anterior, condujo a estimar que la contratación no se ajustó a las exigencias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, dado que las funciones no correspondieron a un cometido específico, pues se trató de labores de apoyo informático permanente, por lo que se concluyó que el vínculo devino en una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

**Tercero:** Que, en lo pertinente, la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad que la demandada dedujo, sobre la base del motivo previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción del artículo 11 de la Ley N° 18.834.

En sustento de lo resuelto, se estimó que la citada norma no define que debe entenderse por accidental ni por específico, advirtiéndose que el actor prestaba servicios para la demandada consistentes en desarrollar las siguientes funciones descritas en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios a honorarios que año a año se prorrogó “(...) *proponer y realizar acciones orientadas al posicionamiento internacional de la ciencia chilena y la vinculación de la comunidad científica nacional con sus pares en el extranjero, en concordancia con los ejes institucionales y dentro del marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; organizar y facilitar la realización de actividades de ciencia y tecnología de carácter internacional (talleres, movilidad de investigadores, misiones institucionales, comisiones mixtas y otros); entregar asesoría técnica sobre relaciones internacionales a las autoridades institucionales; levantar información y elaborar informes sobre el estado del arte de la CTI de países y organismos en el extranjero; apoyar la promoción de las relaciones entre*



*las Subdirecciones de ANID para una mejor realización y seguimiento de las actividades/acuerdos/concursos de carácter internacional, entre otras*”; descripción de la que fluye que se trató de servicios determinados, relativos a funciones vinculadas a cometidos específicos indicados en el contrato, las que no pueden entenderse integrantes de las actividades habituales del órgano demandado, por lo que es dable concluir que la contratación se ajustó a la hipótesis que prevé el inciso segundo del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Por consiguiente, se acogió la causal en cuestión, lo que condujo a omitir pronunciamiento sobre los restantes capítulos del recurso, se invalidó el fallo del grado y se dictó el de reemplazo, que desestimó la demanda por considerar que no concurren los supuestos para que la vinculación pueda ser considerada como constitutiva de relación laboral, sin perjuicio de mantener lo resuelto en cuanto a los feriados otorgados por entender que no fue una materia impugnada.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en la sentencia que se impugna con aquella invocada por el recurrente, correspondiente al Rol N° 92-2019 proveniente de la Corte de Apelaciones de Santiago, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

**Quinto:** Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener presente el criterio permanente expuesto por esta Corte, reflejado en las sentencias dictadas en las causas rol N° 29.867-2018, 13.367-2019, 29.360-2019, 24.676-2020 y 238.101-23, entre muchas otras, en el sentido que el artículo 11 de la Ley N° 18.834 establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración Pública puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto excedan o simplemente no coincidan con los términos que dispone la normativa en comento, sino que revelen caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 11 señalado.



**Sexto:** Que tal razonamiento debe ser contrastado con los hechos que se tuvieron por establecidos en la sentencia impugnada, esto es:

- 1.- Con fecha 18 de julio de 2011, las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios, los que debían ejecutarse en dependencias de la demandada.
- 2.- Dicho contrato expiraba el día 31 de diciembre de 2011, no obstante que fue sucesivamente renovado, por períodos que abarcaban desde el mes de enero hasta el de diciembre de cada anualidad.
- 3.- El actor durante más de 10 años, se desempeñó bajo subordinación de la demandada, prestando servicios reiterados, específicos y continuos.
- 4.- El actor contaba con cláusulas propias de un contrato de aquellos regidos por el artículo 7° del Código del Trabajo, como son, el desempeño de la prestación de servicios en una jornada de trabajo, la recepción de directrices por parte de sus superiores, derecho a uso de feriado legal y/o proporcional, y licencias médicas.
- 5.- La demandada remitió al actor una comunicación que informaba su decisión de no perseverar en el vínculo a contar del mes de diciembre de 2021.
- 6.- Las labores ejecutadas incluían “(...) *proponer y realizar acciones orientadas al posicionamiento internacional de la ciencia chilena y la vinculación de la comunidad científica nacional con sus pares en el extranjero, en concordancia con los ejes institucionales y dentro del marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; organizar y facilitar la realización de actividades de ciencia y tecnología de carácter internacional (talleres, movilidad de investigadores, misiones institucionales, comisiones mixtas y otros); entregar asesoría técnica sobre relaciones internacionales a las autoridades institucionales; levantar información y elaborar informes sobre el estado del arte de la CTI de países y organismos en el extranjero; apoyar la promoción de las relaciones entre las Subdirecciones de ANID para una mejor realización y seguimiento de las actividades/acuerdos/concursos de carácter internacional, entre otras*”.

**Séptimo:** Que, asimismo, cabe considerar lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, y la normativa que regula al servicio en que se desempeñó la actora y que establece sus fines y propósitos.

El primero dispone que “*Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*”



*Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.*

*Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.*

En tanto que el artículo 11 de la Ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, crea la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y establece como su objeto el “*administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio*”, precisando en el artículo siguiente sus atribuciones y funciones.

**Octavo:** Que tales antecedentes permiten concluir que los servicios prestados por el actor no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores no se avienen a un cometido específico, dada, principalmente, su extensión temporal, amplitud, y porque corresponde a labores referidas a actividades propias y permanentes del servicio en que se desempeñó, puesto que aun cuando se las haya enmarcado en algún programa puntual, es claro que sus objetivos coinciden plenamente con los fines que, conforme a la normativa antes citada, deben guiar su actuar.

Asimismo, se estableció que desempeñó sus labores en condiciones propias de un vínculo de subordinación y dependencia, con obligaciones de asistencia en una jornada determinada, con uso de las herramientas de trabajo entregadas por el empleador, quien reconocía derecho a distintos permisos pagados y capacitaciones, características que de acuerdo con previsto en los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio. De manera que la presencia de esas circunstancias determina que una prestación de servicios personales, retribuida con una remuneración mensual fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.

**Noveno:** Que, en tales circunstancias, yerra la Corte de Apelaciones de Santiago al hacer lugar en los términos expuestos al recurso de nulidad planteado por la parte demandada, pues debió rechazarlo en cuanto se discutía la decisión de enmarcar el vínculo en la modalidad contractual consagrada en el artículo 7° del Código del Trabajo, y hacer lugar al mismo sólo a fin de efectuar las precisiones concernientes a las prestaciones previsionales otorgadas que esta Corte realizará; por lo que no cabe sino acoger el recurso de unificación de



jurisprudencia deducido por el demandante, invalidando la sentencia impugnada y procediendo a dictar, acto seguido y en forma separada, el correspondiente dictamen de reemplazo.

Se hace presente que no se devuelven los autos a la Corte de Apelaciones para que se pronuncie sobre los restantes capítulos del recurso de nulidad, por resultar innecesario, atendido que no obstante haberse invalidado el fallo de mérito por estimar concurrente una infracción de ley en particular, lo cierto es que los argumentos que les servían de fundamento se entienden suficientemente abordados mediante los razonamientos expuestos y los que se desarrollarán en la sentencia de reemplazo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante, en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se **invalida**, debiendo dictarse a continuación la respectiva de reemplazo.

Regístrese.

N° 244.806-23.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Ministro Suplente señor Jorge Zepeda A., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Muñoz y el ministro suplente señor Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios la primera y por haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 17/10/2024 14:32:52

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 17/10/2024 15:34:03

IRENE EUGENIA ROJAS MIÑO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 17/10/2024 14:32:53



En Santiago, a diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 483 Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia del grado, previa supresión del párrafo primero de su motivo décimo.

Asimismo, se dan por reproducidos los considerandos quinto a octavo de la sentencia de unificación que antecede.

**Y se tiene, en su lugar, y, además, presente:**

**Primero:** Que es un hecho probado que el demandante prestó servicios a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, como profesional de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, en virtud de sucesivos contratos suscritos conforme al artículo 11 de la Ley N° 18.834, entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, se acreditó que percibía una contraprestación mensual y fija, que a la fecha del término de la contratación ascendió a \$2.124.038, y que ejecutó sus labores de manera estable y permanente en el tiempo, en condiciones propias de un vínculo bajo subordinación y dependencia.

Por otro lado, no aparece que la contratación se aleje de las actividades propias y permanentes del organismo demandado, reguladas mediante la Ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

**Segundo:** Que, como se observa, más allá de lo escriturado en los instrumentos, en especial en los contratos celebrados por las partes y demás documentos aparejados, fluye que en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto de la realidad cotidiana en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir, en la práctica, los elementos que dan cuenta de aquella, conforme el artículo 7° del Código del Trabajo.

**Tercero:** Que, el caso debe ser analizado a la luz de los principios que informan el ordenamiento jurídico laboral, entre ellos, el de primacía de la realidad. Tal postulado es entendido, conforme lo plantea la doctrina, como aquel axioma que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, ordena dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en los hechos, perspectiva desde la cual es innegable que los establecidos conducen a concluir la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, sin que pueda ser derrotada tal conclusión con el mérito de las formalidades en que se expresó y consolidó, en la apariencia institucional, el vínculo examinado, todo ello, conforme lo expresado en los motivos pertinentes del fallo de unificación, de lo cual fluye, como conclusión irredargüible, la





existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, y por lo tanto, regida por el código del ramo, y que, al verificarse su término, sin cumplir las formalidades que dicho texto legal dispone, su desvinculación debe calificarse como un despido injustificado, dando derecho a las indemnizaciones legales consecuentes.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, se acogerá la demanda, declarándose la existencia de la relación laboral por todo el período señalado, esto es, desde el 18 de julio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y que su término corresponde a un despido injustificado, al no haberse ajustado a las formas y causales previstos en el Código del Trabajo, por lo que el demandante tiene derecho a percibir las indemnizaciones y recargos establecidos en los artículos 162, inciso cuarto, 163, inciso segundo, y 168, letra b), del código del ramo. Del mismo modo, serán otorgados los feriados reclamados, por no haberse acreditado su correcto otorgamiento.

**Quinto:** Que, además de las referidas prestaciones laborales, el demandante solicitó las cotizaciones de seguridad social devengadas durante todo el período y la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo.

En cuanto a la aplicación de la sanción, cabe hacer presente que se trata de un asunto unificado por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en causa Rol N° 40.253-2017, criterio que se ha reafirmado sin variación, sosteniéndose que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto que les otorgaba una presunción de legalidad y la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los hace grave en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada.

**Sexto:** Que en lo que atañe a las cotizaciones de seguridad social, cabe reiterar la premisa general invariablemente asumida por esta Corte, expresada, entre otras, en las causas ingreso N° 14.137-2019, 18.540-2019, 19.116-2019, 29.471-2019, 28.932-2019 y 24.589-2020, en que se ha razonado en términos que el artículo 58 del Código del Trabajo dispone que: *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*. Agregando que dicho descuento que afecta las remuneraciones de los trabajadores tiene el carácter de obligatorio, conforme lo regula el artículo 17 del Decreto ley N° 3.500, que expresa: *“Los trabajadores*



*afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponible...”, deber que se ve reforzado por el tenor expreso del artículo 19 de dicho estatuto que previene: “Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador (...) en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”. Su inciso segundo añade que “Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”.*

Por lo que se ha concluido que nuestro ordenamiento considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley; y que la naturaleza imponible de los haberes es determinada por la ley, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, atendida la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones, postura reafirmada por el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, que establece que “*Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden*”.

Presunción, esta última, a cuyos efectos no resulta relevante distinguir si la existencia de la relación laboral formó parte de lo discutido en el juicio y, por consiguiente, fue declarada en la decisión que se impugna, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte también ha reconocido en forma invariable, como se advierte de las sentencias pronunciadas en los antecedentes N° 6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otros, en los que se ha expresado que el pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.



**Séptimo:** Que, por otra parte, sin perjuicio que la legislación impone al empleador el entero de las cotizaciones de seguridad social, previo descuento al trabajador, asignándole el rol de agente retenedor, lo cierto es que cuando el trabajador paga directamente sus cotizaciones en las instituciones pertinentes, sea porque así lo ha decidido en forma voluntaria o porque lo ha acordado con su empleador, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato a honorarios mediante el cual se formalizó la contratación en su origen, se trata de una conducta a la que debe darse valor, pues beneficia su situación previsional, permitiéndole acceder a prestaciones de salud y/o cesantía, e incrementar los fondos con que financiará su futura pensión.

En ambos casos, esto es, pago voluntario de las cotizaciones por parte del trabajador o existencia de una cláusula en el contrato que así lo disponga, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales acciones, al entender que por su intermedio se cumple la finalidad perseguida por la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder efectivamente a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 18.

En efecto, tratándose del primero, a partir de la sentencia dictada en causa rol N° 35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos 41.026-2021, 98.552-2022 y 106.732-2023, entre otras, se ha sostenido sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones de seguridad social cuando el trabajador las ha enterado directamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado cuando es el trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, lo que torna en improcedente ordenar un doble pago de la prestación que se trata, de manera que sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no hayan sido previamente enteradas y sólo en la parte que se adeude.

En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero directo del pago mediante una cláusula incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, se ha decidido lo mismo, lo que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor también a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en



un contrato de trabajo ordinario, nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo. En la sentencia dictada en causa rol N° 98.552-2022, se declaró que si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional que pueda ser imputado al demandado, lo que torna en improcedente la condena a solucionarlos.

Esta última hipótesis, con la sola excepción de las cotizaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728, pues el pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.055, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional, pero, no consideró las del seguro de cesantía; las que, en consecuencia, nunca se entendieron incorporadas en los pactos de esta naturaleza, por lo que, una vez esclarecida la naturaleza del contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicará.

**Octavo:** Que, en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, deberá ser cumplido por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y la Ley N° 17.322 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa establece, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y a los artículos 21 y



22 a) de la Ley N° 17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que establecen.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la tantas veces mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N° 17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N° 3.500 y en la Ley N° 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

**Noveno:** Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, incluyendo tanto el porcentaje que es de su cargo como aquel que debió descontar



oportunamente de la remuneración del trabajador, dado que, como se ha sostenido a partir de la sentencia correspondiente al ingreso N° 5.516-2023, la legislación obliga que ambas fracciones de la cotización sean solucionadas durante la vigencia de la relación laboral, lo que en la especie no fue cumplido. Por otra parte, de ordenarse el cumplimiento parcial de la obligación, limitado únicamente al porcentaje financiado por el empleador, se estarían perjudicando las futuras prestaciones a las que el trabajador pueda acceder con cargo a estos pagos, razonamientos que conducen a modificar lo que, en el último tiempo, se había decidido a este respecto.

**Décimo:** Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados por la sentencia impugnada y los antecedentes allegados por las partes, de los que se desprende que la relación laboral entre las partes se desarrolló entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2021, siendo formalizada a través de una sucesión de contratos de prestación de servicios a honorarios, constando que desde el de fecha 6 de enero de 2021, vigente a contar del día 1 de ese mes y año, se incorporó una cláusula que hacía de cargo exclusivo del demandante el pago de sus cotizaciones previsionales, así como las de salud común y profesional, sin que se hayan incorporado certificados emitidos por instituciones previsionales que den cuenta del cumplimiento de esa obligación durante el período a que alude la cláusula ni sobre los pagos efectuados en los anteriores.

**Undécimo:** Que, por consiguiente, no constando el cumplimiento íntegro de la obligación de pago en lo que atañe a las cotizaciones de previsión y salud, deberá ordenarse su pago por parte del empleador, pero, sólo en lo que atañe a los períodos mensuales no solucionados por el trabajador entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2020, excluyéndose las devengadas a contar del 1 de enero de 2021, época en que entró en vigor la cláusula antes referida.

Así, el empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales y de salud del período indicado, y las de seguro de cesantía devengadas durante toda la vigencia del vínculo, las que deben ser siempre solventadas por el empleador, y, en uno y otro caso, previa consideración de los límites expresados en lo concerniente a intereses, reajustes y multas.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 425 y siguientes y 459 del Código del Trabajo, **se declara que:**

I.- **SE ACOGE** la demanda interpuesta por don PEDRO LUIS FIGUEROA VILLA en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, en cuanto se determina la existencia de una relación laboral que se prolongó entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2021, declarándose injustificado y



carente de causa el despido del cual fue objeto, por lo que **se condena** a la demandada a pagar las siguientes prestaciones:

- a) \$2.124.038.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;
- b) \$21.240.380.- como indemnización por años de servicio;
- c) \$10.620.190.- correspondiente al recargo legal del 50% sobre la indemnización precedente;
- d) \$495.608.- a título de feriado legal;
- e) Cotizaciones previsionales y de salud a enterar en las instituciones a las que se encuentre afiliado el actor, devengadas entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2020, limitadas a aquellas mensualidades efectivamente adeudadas, calculadas a partir de la remuneración imponible respectiva.
- f) Cotizaciones de seguro de cesantía devengadas entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2021, calculadas sobre el 3,0% de la remuneración imponible, debiendo oficiarse a la entidad pertinente para los fines a que haya lugar.

II.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar en las letras a) a d) precedentes lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que las cotizaciones ordenadas pagar en las letras e) y f) devengarán los reajustes que ordenan los artículos 19 del Decreto Ley N°3.500 y 22 de la Ley N° 17.322, calculados desde la época y en los términos que tales normas indican, e intereses, calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

IV.- Que **SE RECHAZA** la demanda en cuanto a la aplicación de la sanción de nulidad del despido.

V.- Cada parte pagará sus costas.

Se **previene** que la ministra **señora Chevesich** y la abogada integrante **señora Rojas** si bien tienen una postura diferente en lo relativo a la aplicación de la sanción de la nulidad del despido en este tipo de casos, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que se refieren a la misma cuestión, declinan incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autoricen su variación.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 244.806-23.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Ministro Suplente



señor Jorge Zepeda A., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Muñoz y el ministro suplente señor Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios la primera y por haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 17/10/2024 14:32:54

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 17/10/2024 15:34:05

IRENE EUGENIA ROJAS MIÑO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 17/10/2024 14:32:55





En Santiago, a diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

